



JUNTA DE GOBIERNO

PRESIDENTE:

D. Mario Andrés Urrea Mallebrera, Presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, O.A.

VOCALES:

Representantes de la Administración del Estado

D^a María Rosell García Iborra, Directora del Área Funcional de Sanidad, por delegación de *D^a Covadonga Caballo Diéguez*, Subdirectora de Sanidad Ambiental Salud Laboral, representante del Ministerio de Sanidad

D. Jorge Hornero Díaz, Jefe de la Sección Técnica del IGME en Murcia. Ministerio de Ciencia e Innovación.

Representantes de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

D. Antonio Luengo Zapata, Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente.

D. Víctor Martínez Muñoz, Secretario General de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente.

D. Sebastián Delgado Amaro, Director General del Agua, por sí y por delegación de *D. Sergio Arjona Jiménez*, Director General de Infraestructuras del Agua de la Junta de Andalucía.

D^a Miriam Pérez Albaladejo, Directora General del Mar Menor.

D. Francisco Marín Arnaldos, Director General de Medio Ambiente.

D. Jaime Pérez Zulueta, Director General de Territorio y Arquitectura.

En Santomera (Murcia), siendo las doce horas y diez minutos del día **dieciséis de octubre de dos mil veinte**, se reúne la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Segura, O.A. asistiendo los Señores/as reseñados al margen.

D. Mario Andrés Urrea Mallebrera, Presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, O.A. da la bienvenida a los asistentes y especialmente a un nuevo miembro de esta Junta, *D. Francisco Javier Sánchez Martínez*, Subdirector Gral. de Protección de las Aguas y Gestión de Riesgos de la Dirección General del Agua, que sustituye a *D. Carlos Moreno Fernández*, Subdirector General de Gestión Integrada de Dominio Público Hidráulico, a quien agradece la labor realizada en esta Junta de Gobierno.

A continuación, toma la palabra *D^a Mónica Gonzalo Martínez*, Secretaria General, que en primer lugar expresa su agradecimiento al personal de la Casa del Agua, del Servicio de Prevención y del Servicio de Informática de la Secretaría General, así como a su secretaria, por el trabajo realizado en la organización de la presente reunión, no solo por la especialidad del lugar, sino también por las garantías frente al COVID-19.

Seguidamente, da lectura de las delegaciones de voto recibidas reseñadas al margen, indicando que en el Presidente de la Junta de Gobierno han delegado los siguientes miembros:

D. Francisco Javier Sánchez Martínez, Subdirector General de Protección de las Aguas y Gestión de Riesgos, representante del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

D. Guillermo Ortiz Figueroa, Director del





Representantes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

D. Francisco Selva Sevilla, Jefe de Servicio de la Agencia del Agua en Albacete, por delegación de D. José Manuel Martín Aparicio, Director Gerente de la Agencia del Agua.

D. Ramón Sáez Gómez, Delegado Provincial en Albacete, por delegación de D. José Juan Fernández Zarco, Director General de Desarrollo Rural.

Representantes de la Generalitat Valenciana

D. José Vicente Benadero García-Morato, Subdirector General de Planificación e Infraestructuras Hidráulicas, por delegación de D^a Mireia Mollà Herrera, Consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica.

D. Josep Llin Belda, Subdirector General de Movilidad, por delegación de D. Arcadi España García, Conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad.

Representantes de usos de regadíos

D. Lucas Jiménez Vidal, del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura.

D. Juan Marín Bravo, de la Comunidad de Regantes de Lorca.

D. Diego Frutos Saura, de la Junta de Hacendados de la Huerta de Murcia, por sí y por delegación de D. Isidoro Ruíz Gabaldón, de la Junta Central de Usuarios Norte Vega Río Segura.

D. Pedro Mompeán Madrid, del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela.

D. Manuel Martínez Madrid, de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena.

D. Javier Berenguer Coves, de la Comunidad de Regantes El Canal.

Representantes de usos energéticos

D. Javier López Nieto, de Iberdrola Generación, S.A.U.

Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno de Murcia, representante del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

D^a Cristina Clemente Martínez, representante del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

D. Pablo Bartolomé Lara Lara, representante del Ministerio de Defensa.

D. Juan Lorente García, representante del Ministerio del Interior.

D^a Teresa Royo-Villanova Navasquies, representante del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

D^a Mónica Gonzalo, a la vista de las delegaciones comunicadas y a efectos de votación, además del voto propio, constata que:

El Sr. Presidente tiene 6 votos delegados.

D. Sebastián Delgado Amaro tiene 1 voto delegado.

D. Diego Frutos Saura tiene 1 voto delegado.

Una vez verificada la existencia de quórum, el Sr. Presidente da paso al **punto uno** del orden del día “**Aprobación del acta de la sesión anterior de 16 de julio de 2020**”

Toma la palabra D^a Mónica Gonzalo para informar que se ha recibido escrito de D. Isidoro Ruiz Gabaldón, representante de la Junta Central de Usuarios Norte Vega Río Segura, por el que solicita que se incorporen al acta las siguientes modificaciones:

Primera: En la página 14, párrafo 6 del acta, dice: “*El Sr. Urrea considera que lo que está reclamando a la CARM es que ejerza su competencia. Y considera que no se ha venido a esta reunión a recibir una clase de derecho constitucional. Le explica que se trata de una sesión de la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica, con unos puntos del día a seguir y que las alegaciones han sido contestadas y explicadas desde el punto de vista jurídico-técnico.*”

El Sr. Ruiz Gabaldón considera que hay que añadir: “*Otorgando el Sr. Presidente al Sr. Ruiz*





Representantes de abastecimientos

D. Marco Antonio Fernández Esteban, Concejal de Pedanías y Barrios, por delegación de D. José Ballesta Germán.

D^a Francisca Baraza Martínez, Delegada en la Mancomunidad de los Canales del Taibilla.

Invitados

D. José Antonio Andújar Alonso, de la Comunidad de Regantes Riegos de Levante, Margen Derecha.

D. Julio Zapata Conesa, de la S.A.T. Los Dones.

Representantes del Organismo

D. Carlos Marco García, Director Técnico.

D. Javier García Garay, Comisario de Aguas, acompañado de D. Adolfo Mérida Abril, Comisario Adjunto.

D. Jesús García Martínez, Jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica.

SECRETARIA

D^a Mónica Gonzalo Martínez, Secretaria General de la Confederación Hidrográfica del Segura, O.A.

para que se explique en treinta segundos a lo que contesta el Sr. Ruiz que con quince son suficientes.”

Segunda: El siguiente párrafo 7 de esta página, dice: “El Sr. Ruiz considera que tiene derecho a contestar brevísimamente sobre esta cuestión porque el Jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica ha hecho mención a la presentación de estas alegaciones. Considera que la respuesta dada adolece de confundir la Confederación Hidrográfica del Segura con la Demarcación Hidrográfica del Segura y ahí es donde está el error ya las competencias son completamente diferentes, por lo que considera que el Organismo de cuenca no es competente en el tema tratado.”

El Sr. Ruiz considera que debe decir: “El Sr. Ruiz considera que tiene derecho a contestar brevísimamente sobre esta cuestión porque el Jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica ha hecho mención a la presentación de estas alegaciones. Considera que la respuesta dada adolece de confundir la Confederación Hidrográfica del Segura con la Demarcación Hidrográfica del Segura y ahí es donde está el error ya que las competencias son completamente diferentes, por lo que ratifica que el Organismo de cuenca no es competente en el tema tratado.”

Tercera: En la página 21, al final, dice: “El Sr. Ruiz pide ausentarse de esta Junta y abandona la sala.”

El Sr. Ruiz considera que debe decir: “El Sr. Ruiz pide ausentarse de esta Junta mientras no se demuestre la competencia de este Órgano para el desarrollo de este acto y abandona la sala.”

La Secretaria General afirma que no hay ningún inconveniente en incluir estas manifestaciones en el borrador del acta. Asimismo, hace constar que se ha enviado la grabación de esta Junta de Gobierno del pasado 16 de julio y los certificados de los Acuerdos, tanto a la Dirección General del Agua de la C.A.R.M., que realizó la petición posteriormente, como a la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, que lo solicitó en la misma sesión.

El Sr. Urrea indica que una vez incorporadas las modificaciones al acta solicitadas por D. Isidoro Ruiz, se debe proceder a la votación de la aprobación del acta de la sesión anterior.

Toma la palabra D. Víctor Martínez Muñoz, Secretario General de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, que destaca la excelente ubicación y escenario para la celebración de esta Junta.





En primer lugar, señala que hay una cuestión de orden en cuanto a la aprobación del acta porque hay un matiz que cambia esa posible aprobación por parte de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (en adelante, C.A.R.M.) y su posicionamiento, que a fecha de hoy sigue sin resolverse. Muestra su protesta ante el informe que se ha solicitado a la Abogacía del Estado y en el que se acusa sobre un posible fraude de ley por parte de los miembros de la C.A.R.M. en la pasada Junta de Gobierno. Considera que esto está fuera de lugar, dinamita cualquier buen entendimiento entre ambas Administraciones y no era el objetivo de los miembros de la C.A.R.M. en la anterior Junta de Gobierno, sino todo lo contrario, donde su predisposición era abordar los distintos puntos, pero siempre con las mejores garantías jurídicas. Expresa que lo que no pueden hacer es comulgar con lo que sucedió en la anterior Junta y mucho menos con el posicionamiento o la respuesta que la Abogacía del Estado da respecto a lo que la C.A.R.M. quiso manifestar en la anterior Junta. La C.A.R.M. en todo momento se mostró contraria a la aprobación de los puntos en cuestión, a los que hace referencia el informe de la Abogacía del Estado.

Por tanto, no pueden comulgar con ese planteamiento, con esa reflexión que hace la propia Abogacía donde dice que en el caso de la aprobación del acta, de la manera que viene recogido, el sentido del voto, al no votar, de los miembros de la C.A.R.M. era afirmativo, Considera que no lo es en ningún caso, por muchas razones. La primera de ellas, porque la documentación les llegó fuera del tiempo establecido, se establecen dos días y les llegó con menos antelación de la permitida, por lo que la formación del voto para ellos era imposible, circunstancia que la advirtieron. Además, se modificaron determinados puntos en ese orden del día sin haber requerido unanimidad de todos los miembros de la Junta, como también era pertinente y es objeto de nulidad del Acuerdo que se adoptó en aquel momento, como así lo advirtieron y pidieron que se retirara del orden del día.

Por ello, la voluntad manifiesta de la Comunidad en ningún caso era la de votar de manera afirmativa, porque además, se le preguntó a la Secretaria General de esta Confederación sobre las consecuencias que tenía la no votación y no se les dio respuesta, solo se hizo una interpretación personal, en ningún caso fundada en derecho, que les hubiese permitido manifestar su voto. Reitera que no se realizó esa aclaración y sigue sin realizarse.

Por todo lo expresado anteriormente, el Sr. Martínez solicita que de igual forma, se pida a la Abogacía del Estado respuesta sobre algunas dudas que se preguntaron por parte de la C.A.R.M., se pida informe sobre la celebración de la Junta, si la votación de los puntos en los que la documentación no llegó en tiempo y forma a los miembros de esta Junta de Gobierno es regular, ya que considera que están ante un acto anulable por la irregularidad en el no cumplimiento de los plazos. Asimismo, también solicitan que la Abogacía del Estado aclare la calidad de los miembros de la CARM, en su calidad de miembros no natos o natos, ya que ellos entienden que son “no natos” y por tanto, la formación y voluntad de sus votos discrepa de los miembros natos, algo que no se ha aclarado a los miembros de esta Comunidad Autónoma y por lo tanto, necesitan que se pida esa aclaración.

Asimismo, hace referencia a un tema que ya se trató en la anterior Junta y es que en ningún caso podrían aprobar unas medidas, unos puntos, que pretenden conculcar la voluntad, la soberanía popular de la Asamblea Regional, que en aquel mismo momento, estaba tramitando una Ley como era la del Mar Menor y se instó a esa Presidencia, a la Confederación Hidrográfica del Segura, a trasladar todas sus sugerencias para incorporarlas en un texto legal, además pactado por la amplia mayoría de los representantes legítimos del millón y medio de murcianos. Piensa que todo eso se obvió y por ello, no pueden sino manifestar y pedir la posición contraria a la aprobación que posteriormente se quiere someter a ratificación en este mismo orden del día, conste en el acta e insiste que en ningún caso el voto a la C.A.R.M. se puede entender como afirmativo porque la C.A.R.M. no puede participar en un





proceso que es susceptible de anulación y además, que han recurrido. Todos esos elementos no pueden concluir en ningún caso en el posicionamiento, en el voto de los miembros de la C.A.R.M. afirmativos. Por tanto, piden que o bien se incorpore al acta ese voto contrario, de manera clara y concisa de los miembros de la C.A.R.M., o evidentemente, no podrán votar a favor la aprobación del acta, afirma que votaran en contra.

El Sr. Presidente pregunta si hay alguna intervención más.

Interviene D. Manuel Martínez Madrid, representante de la C.R. Campo de Cartagena, para solicitar a la Secretaria General una aclaración sobre cuál es el sentido de la aprobación del acta en este primer punto, el sentido de que está recogido en el informe de la Abogacía del Estado que se les ha facilitado o el que viene contemplado en el artículo 18 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público.

La Secretaria General contesta que el sentido de la aprobación del acta es aprobar exactamente lo que refleja el acta de la reunión de 16 de julio de 2020, es un reflejo fehaciente de lo que allí ocurrió, no se trata nada más que de eso.

El representante de la C.R. Campo de Cartagena pregunta si se refiere al artículo 18 de la Ley 40/2015 y con respecto al informe de la Abogacía del Estado, si se entiende que al final significa ratificar en este caso, el voto favorable de la C.A.R.M.

El Sr. Presidente aclara que cuando se pide la aprobación de un acta de la sesión anterior, lo que hay que analizar es que el acta es fiel reflejo de lo que en esa sesión sucedió. En ningún momento el acta dice que la C.A.R.M. ha votado a favor. El acta dice lo que sucedió, los votos a favor, los votos en contra, las abstenciones y hay un párrafo que dice que “no se participó en la votación”, el acta refleja los hechos acontecidos, nada más. Por ello, desde ese punto de vista y a la vista del informe de la Abogacía del Estado, se incorpora en el orden del día de esta sesión el segundo punto, porque según el informe de la Abogacía del Estado, ese hecho no se corresponde con las obligaciones que debe tener un miembro de un Órgano Colegiado.

El Sr. Urrea insiste que en ningún momento la aprobación del acta implica que la C.A.R.M. está votando a favor. Cuando se aprueba el acta, lo que se está diciendo es que lo que ahí está escrito es lo que sucedió, ni más ni menos; por lo tanto, no se está poniendo en boca de nadie ni se está expresando que la CARM votó a favor y esto es una interpretación jurídica de un informe, que en ningún momento queda reflejada en el acta.

Dicho esto, el Sr. Urrea expresa que cuando él leyó el informe resultaba muy difícil de asimilar que un razonamiento jurídico llegue a decir que el voto es afirmativo, cuando hubo manifestaciones claras por parte de la C.A.R.M. no votando, de que estaban en una posición contraria a esos acuerdos. Por lo tanto, en esta sesión de la Junta lo que se pretende es que los miembros que no ejercieron ese deber inexcusable que dice la Abogacía del Estado de votar, voten en conciencia lo que consideran, voto negativo, incluso con voto particular también, no hay ningún problema.

Como él ha manifestado desde el primer momento, la función del Presidente del Órgano de Gobierno es cuidar que los acuerdos se ajusten a la legalidad y lo que pasó en la última sesión dejó dudas razonables sobre si aquello estaba ajustado a la legalidad, y por eso, se solicitó el informe a la Abogacía del Estado. Por lo tanto, cree que se debe separar la aprobación del acta, que es estrictamente aprobar un documento que es el reflejo de lo acontecido y que en ningún momento refleja que la C.A.R.M. estuviera votando a favor, tal y como los miembros han podido leer en el borrador que se les





ha enviado. En este primer punto hay que votar la aprobación del acta, a favor o en contra y en el segundo punto, cada miembro ratificará o no lo que en su momento votó y los que no votaron, se pronunciarán expresamente. Piensa que no hay que debatir otra vez todos los puntos, pero si hay que distinguir que la aprobación del acta es estar de acuerdo, en que refleja lo acontecido y nadie dice que la C.A.R.M. esté votando a favor.

El Sr. Presidente aclara que el informe de la Abogacía del Estado lo que sí dice es que queda una duda de la postura de algunos miembros de un Órgano Colegiado. Por lo tanto, en esta sesión, lo que se pide es que se pronuncien y le parece legítimo que se diga que no, con argumentos que saldrán a colación y que se incorporarán en el acta sin ningún problema.

Interviene D. Victor Martínez para expresar que si ese informe se pidió porque no quedó claro lo que sucedió en aquella votación, piensa que sigue sin quedar claro con respecto a cuál es la condición de los miembros de la CARM.

El Sr. Presidente aclara que son miembros “no natos”, por lo tanto, pueden votar a favor, en contra o abstenerse.

El Sr. Martínez señala que eso ya es un paso importante porque no se les había aclarado; no obstante, de la interpretación que se realiza por sus servicios jurídicos del informe de la Abogacía del Estado, el hecho de que no se introduzca esa posición expresa del voto contrario, podría interpretarse como que su voto fue afirmativo, por tanto, de no incorporarse a tenor de lo que les pide la Abogacía del Estado o de las manifestaciones que realiza el Informe de la Abogacía del Estado, ellos no pueden votar de ninguna de las maneras afirmativamente a la aprobación de este acta.

Toma la palabra la Secretaria General para realizar dos matizaciones. Primera, la petición de Informe se hizo desde Secretaría General y en ningún momento se quiso acusar de fraude de ley, que por otra parte, no es un ilícito penal, es un principio general del derecho. Indica que entre las funciones del Secretario, o Secretaria en su caso, de un órgano colegiado, está el velar por la legalidad formal y material y evidentemente, la no participación de miembros del órgano colegiado es una irregularidad, y es por eso, por lo que se solicitó el informe. Segunda, respecto al tema de la abstención, cree que ese no fue el debate jurídico, sólo se planteó a su consideración la cuestión de la abstención, o no, y en modo alguno se le preguntó sobre las consecuencias que tenía la no participación en la votación, cosa distinta que por otra parte, fue puesta de manifiesto desde el inicio de la sesión de 16 de julio de 2020 repetidas veces. Repasando el acta, se puede ver que ella afirma que son miembros natos y por lo tanto, no pueden abstenerse, sin embargo, dilucidada la cuestión de que los miembros de la CARM no son miembros natos, pueden abstenerse. Destaca que lo importante aquí es que tienen la obligación de votar, porque así lo dice la ley 40/2015, “deberán ejercer el derecho al voto” y las tres facetas en que se puede ejercer este derecho es “afirmativo”, “en contra” o “abstención” y esa fue la razón de la solicitud del informe de la Abogacía del Estado, así como la inclusión del punto segundo del orden del día.

Interviene D. Lucas Jiménez, representante del SCRATS, expresando que si la aprobación del acta no va a generar ningún otro efecto que el de ser un fiel reflejo de lo que ocurrió en la última Junta de Gobierno, está de acuerdo con ello.

El Sr. Presidente indica que a continuación se debe proceder a votar la aprobación del acta, entendiendo que es única y exclusivamente el fiel reflejo de lo que aconteció el 16 de julio de 2020.

La Secretaria General procede a la votación del acta.





El resultado de la votación es el siguiente:

- Votos en contra: 7
- Votos a favor: 26
- Abstenciones: ninguna.

El acta de la sesión de la Junta de Gobierno de 16 de julio de 2020, una vez incorporadas las observaciones de D. Isidoro Ruiz Gabaldón, **queda aprobada** por mayoría de los miembros de la Junta.

El Sr. Presidente da paso al **punto dos** del orden del día **“Ratificación de los acuerdos adoptados en los puntos 3 y 4 del orden del día en la Junta de Gobierno celebrada el 16 de julio de 2020, mediante el ejercicio del derecho de voto de todos los miembros del órgano colegiado, en cumplimiento del mandato contenido en el artículo 19.3.c) de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, de 1 de octubre.”**

El Sr. Urrea explica que se trata de ratificar los acuerdos exclusivamente relativos a los puntos 3 y 4, en los que los votos de los miembros de la CARM y el voto delegado de la Junta de Andalucía no se produjo, es decir, no hubo participación, y que a tenor del informe de la Abogacía del Estado debería de haberse realizado. Una vez aclarado el punto del carácter de miembro “no nato” de estos miembros, indica que el abanico de votaciones que tienen es el afirmativo, el negativo, que puede incluir el voto particular en el plazo de las 48 horas o la abstención. Por ello, la cuestión es clara desde el punto de vista jurídico, no tiene otra finalidad de que quede reglado y ajustado a derecho el acto que tuvo lugar el 16 de julio. No obstante, pregunta si algún miembro quiere participar o hacer alguna matización desde el punto de vista jurídico.

Interviene D. Victor Martínez para expresar que la prueba más evidente de que la Junta del día 16 de julio llevó en su orden del día dos puntos de forma irregular, dos puntos que debían de haber sido retirados y haber sido sometidos a una votación posterior con todas las garantías legales para los miembros de esta Junta, es el hecho de que en el día de hoy se entregan en este mismo orden del día para su ratificación los puntos que ya se llevaron en la Junta del día 16 y como lo que se pretende es la ratificación de aquellos, ellos no pueden más que volver a insistir en la misma argumentación de la anterior Junta, posicionarse de manera contundente en contra. Apunta que ya lo han advertido a través de informes que se han hecho llegar, el que ha sido incorporado en el acta, y además se ha hecho llegar el informe del Grupo de Trabajo de la Cuenca Vertiente sobre “Comentarios a las actuaciones propuestas por la Confederación Hidrográfica del Segura, O.A. sobre el acuífero del Campo de Cartagena y la modificación de sus límites”, que pide que se le dé traslado a todos los miembros de esta Junta porque está convencido de que les va a aclarar mucho respecto a lo que en estos puntos se pretende votar, porque además supone una clara intromisión sobre las competencias de la C.A.R.M. y porque se pretende que se ratifiquen unos puntos que se llevaron de manera irregular en el anterior orden del día. Afirma que el posicionamiento de los miembros de la C.A.R.M. será contrario a la ratificación de ambos puntos.

El Sr. Presidente manifiesta que queda clara la postura de la C.A.R.M. expresada por D. Victor Martínez, como ha dicho él mismo en el legítimo derecho de un miembro de un Órgano Colegiado ejercer su voto en función de las razones que le llevan a una de las tres alternativas. Se pronuncia en contra, como ahora se constatará en el acto de la ratificación.





Toma la palabra D. Manuel Martínez para expresar que en este punto quiere aportar su voto particular. Se manifiesta en contra de este punto porque considera que no se puede ratificar el Acuerdo porque ellos lo han considerado como nulo. Por lo tanto, consideran que no se puede ratificar el Acuerdo, no se puede subsanar por este procedimiento, por lo que su voto será en contra.

Interviene D. Lucas Jiménez, para manifestar que vota en contra y formula su voto particular.

Se procede a la votación por los miembros de la Junta de Gobierno. El resultado de la votación es el siguiente:

- Votos en contra: 15
- Votos a favor: 18
- Abstenciones: 0

El Sr. Presidente declara que **queda aprobada** la ratificación de los acuerdos adoptados en los puntos 3 y 4 del orden del día en la Junta de Gobierno celebrada el 16 de julio, por mayoría de los miembros de la Junta.

El Sr. Presidente da paso al **punto tres** del orden del día **“Informe de la Oficina de Planificación Hidrológica sobre el resultado del procedimiento de información pública para la ampliación del perímetro de la zona afectada desde el punto de vista cuantitativo por la declaración de la MaSub 070.052 Campo de Cartagena, en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico.”**

Toma la palabra D. Jesús García Martínez, Jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica, que pasa a explicar el Informe.

Analiza el resultado del procedimiento de información pública para la ampliación del perímetro desde el punto de vista cuantitativo de la declaración de la masa de agua subterránea del Campo de Cartagena como en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico.

Hace mención a la documentación remitida a los miembros de la Junta de Gobierno y explica el procedimiento en el que se enmarca. Indica que para analizar de donde surge la necesidad de la ampliación habría que remitirse a la reunión del 16 de julio, en la que, como así se ha visto en el acta de la sesión, se vinculó el perímetro de la declaración de en riesgo desde el punto de vista cuantitativo de la masa de agua subterránea del campo de Cartagena al ámbito territorial del acuífero Andaluciense.

Recordó que en el expediente que se había sometido a información pública se definía el ámbito del acuífero Andaluciense en función de la delimitación contenida en los estudios que el IGME había elaborado en los años 1994 y 1995, poniéndose de manifiesto durante el procedimiento la existencia de una nueva caracterización realizada por el IGME, sobre el ámbito territorial del acuífero Andaluciense. Esta nueva caracterización constituía una variación de superficie sobre lo sometido a información pública.

Por tal motivo en aquel momento se incorporaba como propuesta a aprobar por la Junta de Gobierno de perímetro afectado por la declaración en riesgo cuantitativo, la envolvente de ambos perímetros, lo que generó un debate, no tanto sobre la procedencia desde el punto de vista técnico de la propuesta, sino sobre los efectos que desde el punto de vista administrativo suponía la inclusión de una superficie adicional que no se encontraba en el expediente objeto de información pública, lo que podría generar indefensión a los usuarios que tuvieran sus aprovechamientos en la zona ampliada.

Información de Firmantes del Documento			
GONZALO	MARTINEZ	MONICA	28/12/2020 10:13(UTC)
URREA	MALLEBRERA	MARIO ANDRES	28/12/2020 10:53(UTC)





En estas condiciones el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno y que ahora ha sido ratificado, supuso considerar como ámbito afectado por la declaración aquel que había sido sometido a información pública, dejando para una decisión posterior de esta misma Junta de Gobierno la procedencia de su ampliación.

Por ello, y de acuerdo con la decisión adoptada en aquel momento, el día 11 de agosto, el Presidente de la Confederación acuerda iniciar de oficio el expediente para la ampliación del perímetro, el cual es sometido a información pública incluyendo el informe de caracterización del IGME, en los Boletines Oficiales de la Provincia de Alicante, de la Región de Murcia y en el Boletín Oficial del Estado entre los días 12 y 18 del mes de agosto.

Básicamente lo que se pone de manifiesto en ese momento es la consideración de la procedencia de esa ampliación de perímetro, si bien con la incertidumbre que en cuanto a su delimitación recae sobre el mismo y que entiende que habrá que acotar y terminar de definir en el Plan de Actuación de la masa.

Como consecuencia de esa información pública y de las audiencias que han otorgado a la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de Murcia, a la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica de la Generalitat Valenciana y al Instituto Geológico y Minero de España, el Jefe de la Oficina informaba que se habían recibido dos escritos de alegaciones en relación con el contenido del estudio puesto de manifiesto. Señala además que de los tres informes solicitados, únicamente se ha recibido el procedente de la C.A.R.M. sin que conste contestación, ni por parte del Instituto Geológico y Minero de España, ni por parte de la Generalitat Valenciana.

Procede el Sr. García entonces a analizar el escrito recibido de la Directora General del Mar Menor de la C.A.R.M. por el que se traslada las conclusiones del grupo de trabajo de cuenca vertiente del Mar Menor. Hace constar que en el oficio remitido no existe un pronunciamiento expreso en relación con la conformidad de la C.A.R.M. al contenido de dicho escrito, aunque considera que puede entenderse que así es.

El Jefe de la Oficina explica que cuando se han analizado los comentarios realizados por el referido grupo de trabajo, lo que se percibe es que en general, sus manifestaciones se corresponden con valoraciones sobre cuestiones relativas a la procedencia y oportunidad de la adopción de las medidas cautelares y de la propia declaración de la masa como en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico, extremos éstos que al no ser objeto del procedimiento actual sino de cuestiones ya formalmente aprobadas y ratificadas, no considera que pueda entrarse a valorar.

Por eso, y entendiendo que si bien hubiera sido un documento útil en el caso de haber sido aportado a la Junta de Gobierno para su sesión anterior, no procede su consideración en esta fase del procedimiento, motivo éste por el que no se ha analizado con profundidad. No obstante y dado que están en esta reunión los representantes de la C.A.R.M., entiende que podrán manifestar cualquier cuestión que estimen oportuna al respecto.

En todo caso entiende que la dificultad en caracterizar los límites del acuífero, no puede traducirse en una inacción, porque precisamente la manera mejor para poder actuar es a través de la declaración y a partir de ahí, que sea el Plan de Ordenación de Extracciones del Acuífero el que se





pronuncie en relación con las características de los sondeos que existen y las condiciones a las que tiene que adaptarse la extracción de esa masa de agua.

En relación con los dos escritos de alegaciones recibidos indica que uno lo realiza D. Santiago Abascal Conde, en representación del partido político VOX y el otro, D. Manuel Martínez Madrid, en representación de la C.R. del Campo de Cartagena. Estos escritos se han analizado y se ha informado por parte de la Oficina de Planificación Hidrológica sobre los aspectos que contienen, habiéndose facilitado a los miembros de esta Junta de Gobierno ambos documentos. Se informa que en general, evidencian manifestaciones con una casuística similar a las que se han puesto de manifiesto en el escrito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, es decir, no se centran tanto en el objeto del procedimiento actual, que es la procedencia de la ampliación del perímetro afectado por la declaración, sino que cuestionan el fondo de la declaración y la adopción de medidas cautelares.

En el escrito del Partido Político VOX lo que se alega básicamente es la incompetencia por razón del territorio y de la calificación de las aguas, de la Junta de Gobierno para acordar la declaración de la masa en riesgo y la adopción de medidas.

En relación con el escrito de la C.R. del Campo de Cartagena, entiende que muchos de los aspectos sobre los que se alega son cuestiones que ya fueron debatidas en la anterior Junta de Gobierno, formulando oposición a la aprobación de medidas cautelares o indicando inconsistencia en cuanto a la delimitación de los perímetros sobre los que se aplica.

De todo ello indica que por la Oficina de Planificación se entiende que visto el resultado del procedimiento, resultan las mismas conclusiones que ya se definían en el documento que se sometió a información pública, es decir la procedencia de ampliar el perímetro de la declaración desde el punto de vista cuantitativo, para que dé cobertura a la nueva zona identificada por el IGME para el acuífero Andalucense. La mejora del conocimiento se realizará a través de los estudios e informes del Plan de Ordenación de Extracciones, que será el instrumento final por el que se regule la gestión del acuífero y que analizará las características de las diferentes captaciones existentes en el perímetro y de qué manera se capta por ellas las aguas del acuífero Andalucense.

No habiendo ninguna intervención en este punto, el Sr. Presidente pasa al **punto cuatro** del orden del día: **Acuerdo a adoptar: Aprobación de la ampliación del perímetro de la zona afectada desde el punto de vista cuantitativo por la declaración de la MaSub 070.052 Campo de Cartagena, en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico.**

Interviene D. Victor Martínez para señalar que, tal y como afirmó la C.A.R.M. en la anterior Junta de Gobierno, el perímetro, antes de llevarse y someterse a votación, debía haber sido sometido a información pública, cosa que sí se ha hecho en esta ocasión, aunque a ellos les plantean dudas de cara a dar la plena seguridad jurídica que en la anterior Junta no se tuvo. Felicita a todo el equipo que ha intervenido en la elaboración de ese trabajo, pero evidentemente, a ellos les generan algunas dudas a la hora de poder aprobar este acuerdo. La primera de ellas es saber si ha sido sometido, si se ha solicitado el informe previo y pertinente del Consejo del Agua, porque de no haberse hecho, desde el punto de vista de la C.A.R.M., no estarían en disposición de poder someter este punto a votación y debería de quedar encima de la mesa según establece el artículo 173.3 del RDPH. La pregunta sería si se ha reunido el Consejo del Agua para que emita informe sobre la ampliación que se quiere someter a votación.





El Sr. Presidente contesta que el mandato legal que está por encima del artículo 173 exige del paso por el Consejo del Agua de la declaración en riesgo, concretamente el artículo 56 del T.R. de la Ley de Aguas.

El Sr. Martínez indica que el artículo 56 no habla de la ampliación, la ampliación tiene que ser sometida al Consejo del Agua según el artículo 173.3 del RDPH, es una duda jurídica que quieren plantear y que también a los representantes de la C.A.R.M. les genera muchas dudas, entienden que sí tiene que ser sometido y por tanto, no pueden votar a favor.

Toma la palabra D. Manuel Martínez para manifestar que si la forma del acuerdo de declaración es nula, cualquier ampliación que se pueda aprobar considera que es nula en cuanto a la formas y en cuanto al fondo, consideran que en las alegaciones presentadas está todo recogido debidamente, así como en el informe de Grupo de Trabajo de la Cuenca Vertiente, por lo que no van a manifestar nada, afirmando que su voto será en contra.

Se procede a la votación de este punto por los miembros de la Junta. El resultado de la votación es el siguiente:

- Votos en contra: 15
- Votos a favor: 18
- Abstenciones. 0

El Acuerdo **se aprueba** por mayoría de los miembros de la Junta de Gobierno.

5.- Apertura de sedes territoriales: **Informe a la Junta de Gobierno conforme a lo dispuesto en el artículo 2 del Real Decreto 925/1989 de 21 de julio por el que se constituye el organismo de cuenca Confederación Hidrográfica del Segura O.A.**

Toma la palabra D^a Mónica Gonzalo para explicar que el mandato del artículo 2º del Real Decreto 925/89 de 21 de julio, por el que se crea el organismo de cuenca Confederación Hidrográfica del Segura dispone que la sede del Organismo va a radicar en Murcia, pudiendo establecerse oficinas delegadas o auxiliares en aquellas localidades que acuerde el Presidente, oída la Junta de Gobierno. En estos momentos, ya están en disposición de abrir una delegación en Hellín y otra en Orihuela, es decir, en Albacete y en Alicante, evitando así a los ciudadanos de la Vega Alta y la Vega Baja el desplazamiento a la ciudad de Murcia para la resolución de las cuestiones relacionadas con la administración hidráulica.

La oficina de Hellín ha sido cedida por el Ayuntamiento, por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 5 de diciembre de 2019, va a incorporarse de momento un trabajador, personal administrativo, grupo C1, Jefe de Sección, nivel de complemento de destino 20, pero hay posibilidad de ampliar hasta dos puestos de trabajo.

La oficina de Orihuela es más grande, ha sido también cedida por el Ayuntamiento de Orihuela mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 4 de diciembre de 2019 y de momento va a estar ocupada por un Jefe de Sección, Técnico nivel de complemento de destino 24 y un Jefe de Sección nivel de complemento de destino 20, así como el personal de Guardería y los Agentes Medioambientales, lo que suponen hasta 7 trabajadores más.





La Secretaria General explica que en cuanto a la forma de cómo incrementar los efectivos del Organismo, ha habido dos vías, la primera, fue por remisión expresa en noviembre de 2019 de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo, que sigue su tramitación; la segunda, la oferta de empleo público para el año 2021 y ya la última, ha sido previa petición expresa de la Dirección General del Agua de necesidades de personal: El 4 de septiembre de este año se mandó ya una relación de las necesidades, incluyendo el personal que va a atender estas dos oficinas. Indica que esto ha sido siempre una aspiración del Presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura desde el momento en que tomó posesión y que va a ser realidad próximamente.

El Sr. Presidente señala que la idea es poner en conocimiento, como dice el texto legal, la próxima apertura de estos dos centros de trabajo, que tiene el personal administrativo y un personal técnico asociado y también invitarles. La razón fundamental ha sido acercar el Organismo de cuenca al territorio, aquí hay representantes de la Vega Baja y son conscientes de la reivindicación histórica de tener una presencia física de la Confederación en lo que es la Vega Baja y no solo desde el punto de vista de los usuarios, sino también de la atención y la conservación del mantenimiento del río, con lo cual, va a estar un técnico adscrito a la Comisaría de Aguas presente en la oficina de Orihuela, que se va a responsabilizar por la parte que le corresponda, de esa conservación y mantenimiento, por lo tanto, cree que es una decisión importante. Y en la zona de Hellín, lo mismo, también se viene reclamando la atención de este Organismo de cuenca desde el punto de vista del territorio, de la presencia física de esta institución en aquella zona y cree que la Confederación va a dar cumplida respuesta a esa petición que complace a esta Presidencia.

El Sr. Urrea también informa de que se ha firmado el acta de mutación demanial del edificio ubicado en la calle Acisclo Díaz nº 5 de Murcia, lugar donde estaba la Inspección de Tributos. Ese edificio ha sido adscrito a la Confederación Hidrográfica del Segura y en un plazo de unos meses, confía en que a primeros del año próximo, todas las personas que quieran ver al personal de la Comisaría de Aguas por distintas razones, se podrán desplazar a este nuevo edificio, que ha sido gratuitamente recibido por la Confederación, puesto que son 3.500 m², donde el personal va a estar en unas condiciones de trabajo mucho mejores y que además, dado que estaban de alquiler, ello va a suponer un ahorro desde el punto de vista de los presupuestos, asunto que deben conocer también los miembros de esta Junta de Gobierno.

El Sr. Presidente da paso al **punto seis** del orden del día.- **Ruegos y preguntas.**

Toma la palabra D. José Antonio Andújar Alonso, representante de la C.R. Riegos de Levante, M.D., para preguntar por los planes de cuenca. Muestra su preocupación, que cree que también lo es de toda esta Junta de Gobierno, por los planes de cuenca del Tajo, sobre todo el E.T.I. en los desembalses. Destaca que el día anterior, el Gobierno Valenciano, su Presidente y su Consellera, mostraron su preocupación por la situación que eso puede provocar. Espera que esta Junta de Gobierno se haga cargo del daño que les podría hacer si esos desembalses que prevén los planes de cuenca se llevaran a efecto. Piensa que una Junta de Gobierno debe estar preocupada de las aguas de esta Comunidad de esta Confederación Hidrográfica y lo expresa así para levantar las conciencias de lo que esto podría suponer. Piensa que la Mancomunidad de los Canales del Taibilla aquí presente también debe estar muy preocupada.

Interviene D. Victor Martínez, que dentro del apartado de ruegos al Sr. Presidente, quiere que de igual forma que se solicitó informe sobre la posibilidad de que en la anterior Junta de Gobierno de 16 de julio de 2020 se incurriera en fraude de ley, se solicite también informe por parte de este Organismo a la Abogacía del Estado sobre la celebración de la anterior Junta de Gobierno, si la inclusión de





puntos sin haber recibido la información pertinente para la formación de voto por algunos de sus miembros, puede incurrir en fraude de ley y de igual forma piden también informe sobre si se incurre en fraude de ley por el hecho de haber votado la ampliación del perímetro sin haberse sometido al punto 173.3 del RDPH, que establece la obligatoriedad de pasar por el Consejo del Agua. Solicita que si lo tienen a bien, insten a la Abogacía del Estado a resolver ambos preceptos.

Por otro lado, al Sr. Martínez, en el apartado de las sugerencias o de las súplicas, hace una reflexión al Sr. Presidente y a todos los miembros de la Junta, que cuando vienen a una Junta y se encuentran con la votación de puntos en los que nuestras organizaciones agrarias, nuestras comunidades de regantes, el Sindicato Central y se atrevería a decir, hasta la propia Asamblea Regional, que ya ha legislado sobre algunos de los puntos que se traen a esta Junta y a la que se le dio la espalda, no trasladándose esas sugerencias que podrían ser de utilidad, que podrían enriquecer el texto legislativo y finalmente, se habría aprobado en la Cámara. Además, también se conoce la voluntad contraria del Gobierno de la Región de Murcia a participar en un proceso de dudosa legalidad. Por todo ello, la pregunta es evidente ¿a quién sirve esta Confederación Hidrográfica? Si no es a los usuarios, a los miembros que la componen, a los que se pueden beneficiar de la toma de decisiones y a los que se le da la espalda. A él le gustaría creer que se está para ayudar a nuestra gente, a nuestros agricultores, a nuestros regantes, pero cuando se toman decisiones a espaldas a ellos, cuando además, después de haber manifestado su negatividad a la toma de esas decisiones de las que no se tienen plenas garantías legales, que incluso se pueden llegar a dudar de la utilidad de las mismas, a veces se podría pensar que nos olvidamos de satisfacer los intereses de los ciudadanos que aquí se representan, en el territorio que tiene que ver con el de esta Confederación, y se está representando los intereses o satisfaciendo a otras demandas de algunos que no están aquí, que es el territorio con los que ellos tienen que vivir y trabajar.

D. Victor Martínez expone esa reflexión porque cree que llegar a este punto es del todo innecesario, cuando la voluntad de acuerdo por parte de esta Comunidad Autónoma siempre ha sido inequívoca, que tengan que forzar de la manera que se forzó en la última Junta de Gobierno y que de nuevo se vuelve a forzar en la de hoy, pudiéndose hacer las cosas bien, como así indicaron y manifestaron en la anterior Junta y como así vuelven a manifestar en la de hoy. Por tanto, pide admitir este ruego, que podría ser más una súplica de la necesidad de cambiar esas formas y de variar la política que está llevando la Confederación, porque ellos entienden que ese no es el camino.

Toma la palabra la Secretaria General porque el que calla, cuando tiene que hablar, otorga, para aclarar que la petición a la Abogacía del Estado era saber qué posición jurídica adoptan los miembros de un órgano colegido que deciden no participar, que han coadyuvado a la formación del quórum, que a mitad del desarrollo no participan en la votación de dos puntos y si participan en otro, esa era la cuestión que no les cuadraba y por eso pidieron informe. Insiste que fraude de ley no es un ilícito penal, es un principio general del derecho, una forma de calificar si ha habido algún tipo de obstáculo en el desarrollo de la toma de decisiones de un órgano colegiado, por no poder no participar en la votación como si no hubieran comparecido de forma presencial.

Interviene D. Antonio Luengo, Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, que entiende lo que expone la Secretaria General; no obstante, sí considera que es fundamental que se pida ese informe por parte de la Secretaria de la Junta de Gobierno a la Abogacía del Estado, precisamente en los mismos términos en los que se preguntó anteriormente.

Por otro lado, se suma a las palabras del Sr. Andújar, en relación a que lo importante es que estamos en periodo de presentar alegaciones para esos Esquemas de Temas Importantes. Ahí está no el futuro, sino el presente de este trasvase y eso es por lo que realmente hay que estar preocupados y





ocupados esa mañana. Explica que desde el Gobierno Regional también están trabajando en esa línea y sugiere que se deben aunar esfuerzos por el objetivo de intentar sensibilizar a aquellas Comunidades Autónomas o aquellos que intentan pelear entre ellas. Señala que son 5 Comunidades Autónomas las que han estado coordinadas, trabajando de manera conjunta y beneficiándose de ese trasvase. Asimismo, señala que se requieren inversiones a Comunidades Autónomas, sobre todo a Castilla-La Mancha.

El Sr. Luengo considera que no es justo que todavía haya vecinos que vean pasar el agua por la puerta de su casa y que no puedan hacer uso de ella y sin embargo, tengan que abastecerse con cisternas. Insiste en que eso no es justo y tampoco que haya comunidades autónomas que no hayan hecho sus deberes y que estén vertiendo de forma irregular o inadecuada al río, lo que puede provocar una inestabilidad del ecosistema del mismo y por lo tanto, se pretenda subir los caudales ecológicos, precisamente por las consecuencias que eso tiene para todo el levante español. Por ello, y en la línea que ha comentado el Sr. Andujar, pide que se trabaje de forma coordinada para que sean capaces de sensibilizar y explicar a todos aquellos que no creen en ese trasvase, en ese eje vertebrador que se tiene durante más de 40 años para 5 comunidades autónomas. Pide que seamos capaces de elevarnos, de separar cualquier tipo de discrepancias que tenemos entre nosotros, que pensemos en nuestros hijos, en el presente y en el futuro y por eso, cree que es importante ser capaces de tener un texto que dé solidez a ese trasvase y evidentemente, que no suponga el cierre o la muerte del mismo. Por eso, desde el Gobierno Regional están trabajando en coordinación con comunidades de regantes y organizaciones agrarias, a lo que también invitan a la Confederación a este grupo de trabajo, con el objetivo de poder establecer las justificaciones técnicas necesarias y por supuesto, se brindan tanto en inversiones como en tecnología.

Expresa que ellos son capaces de explicar y por supuesto, formar a todas aquellas comunidades autónomas, a todos aquellos municipios, tanto la red de distribución de agua, como también lo que es la red de saneamiento. Por lo expuesto, no puede estar más de acuerdo con lo que ha dicho el Sr. Andujar y considera que eso es de verdad en lo que tienen que estar preocupados y que sería interesante si el Sr. Presidente lo tiene a bien y es posible por parte de la Junta de Gobierno su posicionamiento a favor de que en ese Esquema de Temas Importantes que no ponga en peligro a ese trasvase Tajo-Segura.

El Sr. Presidente manifiesta que el momento de apoyar las cuestiones que se han dicho en esta reunión será cuando, en la tramitación de los distintos documentos de planificación, se pronuncie la Junta de Gobierno, así como previamente a los informes que debe elaborar el Consejo del Agua. Evidentemente, se podría llegar a un punto concreto porque deberá ser así, cuando se lleve el Plan de cuenca al Consejo del Agua que precisa de un informe previo de la Junta de Gobierno. Una cosa es la política que está con cierto nivel y otra cosa es el trabajo técnico que hace la Confederación desde el punto de vista del documento que ha de generar y nadie debe poner en duda que este equipo que está ahora pondrá negro sobre blanco, con relación al impacto socioeconómico que puede tener en la cuenca del Segura la detracción de caudales del Tajo-Segura, tanto para el abastecimiento como para el regadío respecto a la situación actual. Ese es el margen que tiene el Organismo de cuenca como tal, no puede hacer nada más ni nada menos, ya le corresponderá a otras instancias el abordar ese tema porque los Planes Hidrológicos los aprueba el Gobierno, por lo tanto, al Gobierno le deben de llegar las sensibilidades de todos los territorios y no es fácil, pero desde ese punto de vista esta Junta de Gobierno sabe que los trabajos que están haciéndose desde la Confederación, lo que pretenden y de hecho hay un punto, en el Esquema Provisional de Temas Importantes en esa línea; van a colaborar desde ese punto de vista, ya que es su obligación, poner encima de la mesa esas repercusiones que puedan tener, no ya solo la pérdida de volúmenes asociados al trasvase Tajo-Segura, sino también los impactos en las tarifas que van a tener la implementación cada vez mayor de las aguas desaladas,





porque al final, no hay que olvidarse y eso lo saben mejor que nadie, nuestros usuarios, hay un mix de aguas que parece que pueden sostenerse pero con un equilibrio que es el actual. Si alguna de las fuentes de aguas de ese mix sufre una variación, en este caso, unas más baratas disminuyen y otras más caras, suben, ese equilibrio se rompe.

Manifiesta que desde ese punto de vista, este Organismo va a estar siempre como lo ha estado, está ahora y estará siempre. Hace referencia al periodo 2004-2010, que él fue Jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica y se hicieron unos trabajos que también se presentaron en la Junta de Gobierno de entonces, en la que algunos miembros que hoy están aquí ya estaban, sobre el impacto socioeconómico del trasvase Tajo-Segura, que luego el propio Sindicato realizó y amplió con una consultora. Por ello, nadie puede poner en duda sobre lo que este Organismo de cuenca opina en esa cuestión; distinto es el margen que tiene. El margen que se tiene es el que acaba de explicar y el ámbito de decisión está en otro sitio y todo lo que sea una postura desde el punto de vista social y de los agentes sociales, entiende que permitirá que el Gobierno de España adopte una decisión razonable.

El Sr. Presidente, dejando ya el tema del trasvase y volviendo a los temas planteados, insiste una vez más que el único objetivo de esta Presidencia, a raíz de lo que sucedió el 16 de julio, fue dotar de legalidad a lo que allí se actuó. Expone que han creído sinceramente que ese era el procedimiento de hacerlo, si deben de volver a consultar a la Abogacía del Estado, indica que lo harán si hay una cuestión de legalidad de por medio que como ya ha avanzado, piensa que no; no obstante, lo analizarán y lo determinarán.

Y con respecto a la pregunta sobre a quién sirve este Organismo de cuenca, responde que sirve a sus finalidades y una de sus finalidades es el control y la protección del dominio público hidráulico y se sirve en un Órgano democrático, en el cual se realizan votaciones y todos los miembros que hay en esta sesión expresan en conciencia lo que creen que deben votar. En la Confederación Hidrográfica se extienden cuatro comunidades autónomas, tiene multitud de campos abiertos y es el Órgano de Gobierno que por eso se llama así, el que gobierna la Confederación y lo que hay que entender es que son decisiones legítimas las que aquí salen. Desde el punto de vista de los intereses de los 33 miembros que hay aquí representados con votos y desde el punto de vista de la legalidad, que es la que le corresponde a él, por lo que dice el texto legal vigente. Desde ese punto de vista, no hay ningún problema en someter a la legalidad las cosas que están haciendo, pero entiende que lo que se ha hecho hoy, las posibles irregularidades, no fraudes de ley, que en ningún momento han querido acusar de un ilícito penal, eso ha quedado muy claro por parte de la Secretaria General.

El Sr. Urrea piensa que en esta sesión han quedado subsanadas todas las posibles deficiencias que hubieran podido acontecer en la sesión del 16 de julio. Anuncia que nuevamente contactarán con la Abogacía del Estado por tranquilidad y en función de lo que les digan, si procede una petición de informe oficial, lo harán, para que se cierren estos temas, pero ya les adelanta que han tenido conversaciones, además de lo que dice el documento, que indican que la legalidad de lo actuado el día 16 de julio y lo actuado hoy, se ajusta a derecho.

Interviene el representante de la C.R. del Campo de Cartagena, para pedir que su voto particular que ha transcrito, se adjunte al acta, a fin de que quede claro. En relación con la defensa del trasvase, piensa que hay asuntos contemplados en el Esquema de Temas Importantes del Tajo que le parecen poco afortunados, por la razón de que se está castigando y se están reduciendo recursos a aquellos que tienen volúmenes concesionales insuficientes y que utilizan las mejores técnicas de regadío con las que se obtiene un mayor rendimiento. Ese aprovechamiento del agua no se está incentivando, ejecutándose sin embargo por parte de la Administración o por quien corresponda, obras de modernización en otras zonas que están con dotaciones concesiones de 12.000, 14.000 o 16.000





m³/ha/año. Apunta que no entiende ese agravio comparativo y considera que al final se está restringiendo al que ya está restringido de por sí, al que tiene menores concesiones y al que optimiza mejor el uso del agua. Por otro lado también entiende que se les restringe al limitar la extracción del agua del acuífero, para unas explotaciones con dotaciones de 3.000, 4.000 o 5.000 m³/ha/año mientras hay otras zonas donde con 12.000, 14.000 y 15.000 m³/ha/año, por lo visto se considera que no se contaminan sus acuíferos. Todo esto le parece que no es correcto.

Con respecto al tema del Mar Menor, le ruega al Sr. Presidente que se tenga la misma urgencia a la hora de tramitar y ejecutar todas aquellas infraestructuras que van a permitir la recuperación del Mar Menor o al menos, que se tenga la misma prisa, la misma urgencia que se ha aplicado para la declaración del acuífero y para el establecimiento de estas medidas cautelares.

D. Manuel Martínez formula una pregunta, si ya se ha adjudicado en la elaboración del proyecto de la ampliación de la desaladora del Mojón. Por otro lado, como siempre han hecho, y entiende que esto va a continuar y si los Tribunales no dicen otra cosa al contrario, no saben el tiempo que tardarán en pronunciarse, respecto a la declaración del acuífero, manifiesta que su comunidad de regantes está dispuesta a colaborar en la elaboración de ese Plan de Ordenación que ha comentado el Jefe de la Oficina de Planificación, que fue lo que consideraron que se debería haber abordado en esta situación, puesto que en el Plan de cuenca que está ahora en elaboración y entrará en vigencia, en vigor próximamente, se podían haber recogido todas estas actuaciones y no haber ido a unas medidas cautelares que consideran que les dañan muchísimo su actividad agraria, la economía y el desarrollo socioeconómico de su zona, sobre todo, el campo de Cartagena.

El Sr. Presidente expone que lo que se necesita es tener el Plan de Ordenación cuanto antes, pero previamente también hay que constituir la Comunidad General de Usuarios, la Junta Central, que es un paso que tiene que acometer la Comisaría de Aguas para tener precisamente un interlocutor o un conjunto de interlocutores, que son los que de verdad han de intervenir en ese Plan de Ordenación. No le cabe duda que la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena será un actor importante de esa Junta Central o de esa Comunidad General y por lo tanto, intervendrá en lo que es la redacción del Plan de Ordenación, pero al final tendrá que venir y someterse a esta Junta de Gobierno y será esta Junta de Gobierno la que lo aprobará, pero en un plazo de entre un año o dos años, que es lo que marca la ley.

Desde ese punto de vista, mientras no se redacte ese Plan de Ordenación, las medidas cautelares son las que son y estarán en contacto con la Comunidad Autónoma para ver el grado de cumplimiento de las mismas, que pueden ser de alguna manera, sustituidas o complementadas por las propias que vienen en la ley. Expresa que no hay ningún interés en usurpar competencias de nadie, las competencias de las buenas prácticas agrarias están en la Consejería, eso lo tienen muy claro, ellos han dictado aquí unas medidas cautelares que les han dado traslado y ahora corresponde a la Consejería saber del grado de aplicación de las mismas. Cree que está pendiente, va a ser inminente, lo que llaman el Plan de actuación reforzado, desde el punto de vista de las buenas prácticas agrarias, según se ha comunicado en la contestación del Dictamen motivado de la Unión Europea y piensa que todo eso ayudará para la protección del dominio público hidráulico, que es lo que les compete, el acuífero. Siempre se les vincula al Mar Menor, pero ellos, lo que tienen que proteger es el acuífero, con la paradoja que se podría dar de que sin agricultura sobre el acuífero y estando plenamente protegido, el Mar Menor seguiría recibiendo aportes de nitratos, por lo tanto, ahí hay que actuar en las dos líneas, desde el punto de vista del acuífero, que es lo nuestro y desde el punto de vista del Mar Menor, que como sabe el Consejero, están participando y quieren retomar todas las actuaciones que sean precisas de las administraciones para lograr el punto de encuentro.





Interviene el Sr. Consejero para expresar que la C.A.R.M. está trabajando como saben los miembros de la Junta, para vigilar el cumplimiento de la norma, de la Ley 3/2020, y lo que también les dicen sus servicios jurídicos es que ellos no tienen competencia para velar por el cumplimiento de las medidas cautelares que tomó esta Junta de Gobierno, por tanto, en cuanto les indiquen que están terminados los informes jurídicos en este sentido, según les adelantaban, se enviarán a través de la Presidencia de la Confederación, a fin de que se dé traslado a la Junta de Gobierno para que por ésta se decida quien tiene que velar por el cumplimiento de esas medidas cautelares.

Ellos, en el ánimo de la colaboración entre Administraciones, por el hecho de que cualquier tipo de inspección y cualquier posible incumplimiento a esas medidas cautelares, sí le darían traslado a la Confederación para su conocimiento y efectos oportunos.

El representante de la C.R. del Campo de Cartagena pregunta cómo va el proyecto de la desalobrador de El Mojón.

El Sr. Presidente contesta que el pliego de bases para contratar la asistencia técnica para la redacción del proyecto está en preparación, tal y como ocurre con la desnitrificadora, sin la cual no podría funcionar el colector de vertido cero.

Sin más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta la sesión, siendo las trece horas y treinta minutos.

VOTO PARTICULAR FORMULADO POR LUCAS JIMÉNEZ VIDAL, PRESIDENTE DEL SINDICATO CENTRAL DE REGANTES DEL ACUEDUCTO TAJO-SEGURA EN LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA CELEBRADA EL DÍA 16 DE OCTUBRE DE 2020.

Lucas Jiménez Vidal en su calidad de Presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura y miembro de la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Segura, como vocal representante de usos de regadíos, respetuosamente disiente con el acuerdo adoptado por la mayoría de la Junta de Gobierno en su reunión de 16 de octubre de 2020 en relación con los siguientes puntos del orden del día:

2. Ratificación de los acuerdos adoptados en los puntos 3 y 4 del orden del día en la Junta de Gobierno celebrada el 16 de julio de 2020, mediante el ejercicio del derecho de voto de todos los miembros del órgano colegiado, en cumplimiento del mandato contenido en el artículo 19.3.c) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

4. Acuerdo a adoptar: Aprobación de la ampliación del perímetro de la zona afectada desde el punto de vista cuantitativo por la declaración de la MaSub 070.052 Campo de Cartagena, en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico.

Respecto de los que ha votado en **contra**, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 17.3 letra c), en conexión con el apartado 5 del mismo precepto de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), formula el siguiente **voto particular**, que insta se incorpore al texto del acta que se apruebe, y a tal efecto, en la misma sesión hace entrega del presente voto particular a la Secretaria de la Junta de Gobierno.





Motivos del voto particular

El voto en contra respecto a los puntos del orden del día número 2 y 4 se fundamenta en las infracciones legales denunciadas en la reunión de la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Segura celebrada el 16 de julio de 2020, que constan en el acta. Estas infracciones, como se volverá a razonar sucintamente, se han producido en el origen mismo del procedimiento de declaración de la MaSub 070.052 Campo de Cartagena en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico, y producen la nulidad de pleno derecho del acuerdo inicial y de los actos subsiguientes que en este procedimiento se dicten. Por ello, los motivos que fundamentan el voto son comunes para ambos puntos del orden del día.

I) Cuestión previa

Con carácter previo debe hacerse la siguiente consideración a propósito del punto 2 del orden del día que se refiere a la “Ratificación de los acuerdos adoptados en los puntos 3 y 4 del orden del día en la Junta de Gobierno celebrada el 16 de julio de 2020...” Estos puntos del orden del día eran:

3. Acuerdo a adoptar: Aprobación de la declaración de la MaSub 070.52 Campo de Cartagena en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico (artículo 56 del TRLA).
4. Acuerdo a adoptar: Aprobación de las medidas cautelares en relación con la extracción y la protección de la calidad de las aguas de la MaSub 070.052 Campo de Cartagena (artículo 56.1b del TRLA).

La propia indicación del punto 2 del orden del día es confusa ya que se refiere a una ratificación de acuerdos que ya han sido adoptados. La causa que se aduce por la Confederación Hidrográfica para someter a votación de nuevo estos artículos es el cumplimiento del artículo 19.3 letra c) de la LRJSP; precepto que establece que los miembros de los órganos colegiados deberán: “c) Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así como expresar el sentido de su voto y los motivos que lo justifican. No podrán abstenerse en las votaciones quienes por su cualidad de autoridades o personal al servicio de las Administraciones Públicas, tengan la condición de miembros natos de órganos colegiados, en virtud del cargo que desempeñan”. Como consta en el acta de la reunión de la Junta de Gobierno de 16 de julio de 2020, este vocal ejerció su derecho de voto, votando en contra del acuerdo y justificando el sentido del mismo (p. 17 del acta respecto del punto 3 y p.26 del acta en relación al punto 4).

No se comprende la inclusión de este punto en el orden del día, ni la Confederación Hidrográfica aporta ninguna explicación, ni documentación que lo justifique, en la presente convocatoria. Solo cabe concluir que su incorporación al orden del día es superflua, habida cuenta que sobre esos dos puntos del orden del día ya se votó.

Tampoco esta votación puede considerarse como una convalidación, en primer lugar, porque las infracciones procedimentales denunciadas implican la nulidad de pleno derecho; y en segundo lugar, porque la Confederación Hidrográfica no ha hecho ninguna subsanación, ni ha retrotraído las actuaciones, ni ha sometido al trámite de información pública las medidas cautelares, en definitiva, no ha cumplido con lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC).

Con todo, este vocal ha reiterado su voto contrario, en los mismos términos y por los mismos motivos que expresó en la reunión del 16 de julio de 2020.

II) Infracciones procedimentales graves





El voto en contra sobre los acuerdos de referencia, se funda en las irregularidades procedimentales en que ha incurrido la Confederación Hidrográfica del Segura. Estas infracciones procedimentales son: (a) la infracción del plazo mínimo para la puesta a disposición de la documentación necesaria previa a la reunión y (b) la falta de sometimiento a información pública de las medidas cautelares que se sometían a la consideración de la Junta de Gobierno.

A juicio de este vocal estas infracciones son causa de nulidad de pleno derecho de la convocatoria y de todos los actos administrativos subsiguientes. Estas irregularidades obligan a votar en contra de los acuerdos propuestos por la Confederación en los puntos 2 y 4 del orden del día e impiden que pueda analizarse el fondo de la cuestión.

(a) La CHS no facilitó con la antelación mínima la información relativa a los asuntos que se iban a tratar en la Junta de Gobierno.

Con carácter general, la documentación e información que va a ser examinada en las reuniones de los órganos colegiados debe aportarse en el momento de la convocatoria, (artículo 17.3 de la LRJSP), pero en todo caso, con una antelación mínima de dos días, como con toda claridad establece el artículo 19.3 letra a) que indica que los miembros de los órganos colegiados deberán: “Recibir, con una antelación mínima de dos días, la convocatoria conteniendo el orden del día de las reuniones. La información sobre los temas que figuren en el orden del día estará a disposición de los miembros en igual plazo”.

Precepto que debe conectarse con lo establecido en el artículo 30 de la LPAC, que establece la regla para el cómputo de los plazos señalados en días, de la siguiente forma, “3. Los plazos expresados en días se contarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo”.

Así las cosas, en este caso, estando convocada la reunión el día 16 de julio, los miembros deberían haber tenido acceso a toda la información relativa a los asuntos a tratar en la reunión como mínimo, el día 13 de junio. Sin embargo, tal y como reconoce la propia Confederación y está debidamente acreditado, durante el día 14 se recibe documentación, superando el plazo mínimo legalmente previsto.

Teniendo en cuenta la trascendencia y gravedad de los acuerdos que se iban a tomar, y la importancia de conocer y estudiar la documentación justificativa, esta circunstancia se subsume con toda claridad en el artículo 47.1 letra e) de la LPAC que predica la nulidad de pleno derecho de los actos administrativos: “Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados”. Es obvio que haber privado a los miembros de la Junta de Gobierno del plazo legal mínimo (dos días) para conocer y estudiar la documentación no puedo sino calificarse como la quiebra de una regla esencial para la formación de la voluntad de la Junta de Gobierno. No puede admitirse que los miembros de la Junta de Gobierno, distintos a los representantes de la Administración General del Estado, no puedan conocer con la debida antelación la documentación sobre la que van a tener que pronunciarse. Lo contrario es cegar deliberadamente a buena parte de los miembros de la Junta de Gobierno, impidiendo que puedan emitir un voto informado.

(b) Falta de sometimiento al trámite de información pública de las medidas cautelares propuestas.

A la anterior infracción debe añadirse que las medidas cautelares propuestas no han sido sometidas a información pública. Estas constituyen un mecanismo legal que sustituye provisionalmente al programa de actuación, y que como medida previa y provisional debe someterse necesariamente al trámite de información pública. Máxime cuando sí se sometió a información pública, el estudio de la masa de agua subterránea. Asimismo, la pura lógica





advierte que las medidas cautelares, cuando se contemplan, como fue el caso, tendrían que incorporarse al propio estudio o ser un documento paralelo al mismo, puesto que, en principio, deberían ser una consecuencia directa del mismo.

Los trámites de audiencia y de información pública han sido considerados por la jurisprudencia como “fundamentales” o, incluso, como “sagrados”(vid. sentencia del Tribunal Supremo de 27 de mayo de 2008). La omisión de estos o su realización con defectos sustanciales genera una indefensión que provoca un vicio determinante para la nulidad del procedimiento, en los términos del artículo 47.1, letras a) y e) de la LPAC.

Estas infracciones se dan en el momento inicial de la tramitación del procedimiento, causando la nulidad de pleno derecho de todos los actos y actuaciones administrativas posteriores; lo que obliga a votar en contra de estos acuerdos, sin dejar de lamentar que, por la inadecuada tramitación administrativa no sea posible abordar, con la información y rigor precisos, el fondo de la cuestión.

Estos son los motivos en los que se funda el sentido contrario del voto formulado, y sin perjuicio de hacer expresa reserva sobre la posible impugnación de los mismos ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Y para que así conste, lo firma el vocal en Santomera a 16 de octubre de 2020.

Fdo. Lucas Jiménez Vidal

VOTOS PARTICULARES QUE PRESENTA D. MANUEL MARTÍNEZ MADRID, COMO PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CAMPO DE CARTAGENA

JUNTA DE GOBIERNO DE LA CHS DE FECHA 16.10.2020

RESPECTO DEL PUNTO SEGUNDO DEL ORDEN DEL DÍA.

RATIFICACIÓN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LOS PUNTOS 3 Y 4 DE LA JUNTA DE GOBIERNO CELEBRADA EL 16 DE JULIO DE 2020 MEDIANTE EL EJERCICIO DEL DERECHO DE VOTO DE TODOS LOS MIEMBROS DEL ORGANO COLEGIADO, EN CUMPLIMIENTO DEL MANDATO CONTENIDO EN EL ART. 19.3c de la ley 40/2015 de RJSP, DE 1 DE OCTUBRE.

Reiteramos en este punto y de nuevo los defectos formales y procedimentales que fueron alegados en la Junta de Gobierno de 16.07-2020, consistentes en las Infracciones procedimentales graves en los que ha incurrido el Organismo de Cuenca consistentes en: a) la infracción del plazo mínimo para la puesta a disposición de la documentación necesaria previa a la reunión. Y b) la falta de sometimiento a información pública de las medidas cautelares que se sometían a la consideración de la Junta de Gobierno, y que fueron puestas de manifiesto en el voto particular formulado por este vocal en la sesión de 17.06.2020 e incorporado al acta, y que en aras a la economía procesal, damos por reproducido en este punto a los mismos efectos de denuncia de los graves defectos procedimentales señalados y que son causa de nulidad de pleno derecho en insubsanables.

Además, esta parte discrepa abiertamente del informe de la Abogacía del Estado acerca de la doctrina clásica en torno a las declaraciones de voluntad, de que **el silencio debe reputarse como un**





consentimiento tácito a la adopción del acuerdo, puesto que dicha doctrina está reservada a las RELACIONES CIVILES ENTRE PARTICULARES, pero no en el ámbito del derecho administrativo y de las Administraciones Públicas, donde, *éstas sirven con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho (ART 3.1 LEY 40/2015 RJSP), sujetas pues al Principio de Legalidad*, de ahí que el Art. 19.3.c, de la Ley 40/2015, sea explícito a la hora de establecer la obligación legal de los miembros del órgano colegiado, a manifestarse afirmativa o negativamente si es representante de una Administración Pública o abstenerse si no lo es.

Así pues, contextualizado el debate, en la CONFORMACIÓN DE LA VOLUNTAD DE UN ÓRGANO COLEGIADO DE LA ADMINISTRACIÓN, el pasado 16.07.2020, la Presidencia tendría que haber suspendido la votación en ese momento por existencia de vicio legal (Art. 19.3.c) y no haber adoptado acuerdo alguno y haber ejercido la publicación que le viene impuesta en el Art. 19.2e) de “Asegurar el cumplimiento de las leyes”, pero no lo que hizo, llevando la votación hasta el final, con la aprobación de los acuerdos 3 y 4 del orden del día de la Junta de Gobierno de 16.07.2020, a pesar del flagrante incumplimiento de la ley que estaba teniendo lugar ante él. Todo esto nos lleva nuevamente a formular el presente **VOTO PARTICULAR EN CONTRA DE ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.**

RESPECTO DEL PUNTO CUARTO DEL ORDEN DEL DÍA, DE ACUERDO A ADOPTAR DE APROBACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL PERÍMETRO DE LA ZONA AFECTADA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE CUANTITATIVO POR LA DECLARACIÓN DE LA MaSub 070.052 CAMPO DE CARTAGENA, EN RIESGO DE NO ALCANZAR EL BUEN ESTADO CUANTITATIVO Y QUÍMICO.

Este vocal considera que este acuerdo es nulo de pleno derecho, habida cuenta que trae causa de actos anteriores que eran nulos en su origen por los vicios y defectos de forma señalados, tanto en el voto particular de la sesión de la Junta de Gobierno de 16.07.2020, como ahora con posterioridad, al haberse conformado unos acuerdos, cuya voluntad del órgano colegiado, se encontraba viciada al no constar el consentimiento expreso de la CARM, miembro del órgano colegiado, y con el deber de pronunciarse, votando a favor o en contra de la aprobación de los citados acuerdos, ni bastando la pretensión de ratificación posterior de los mismos, sin haberse subsanado previamente todos los defectos formales del procedimiento.

En cuanto al fondo, y en aras al principio de economía procesal y de trámite, damos por reiteradas las alegaciones efectuadas en el escrito de fecha 21.09.2020 presentadas por la Comunidad de Regantes Campo de Cartagena, e incorporadas al expediente, así como las recogidas por el Grupo de Trabajo de Cuenca Vertiente, integrado en el Comité de Asesoramiento Científico para la recuperación del Mar Menor, que incluye Comentarios a las actuaciones propuestas por la Confederación Hidrográfica del Segura sobre el acuífero del Campo de Cartagena y la modificación de sus límites, los cuales damos íntegramente por reproducidos para sustentar el sentido de **VOTO NEGATIVO A LA ADOPCIÓN DEL ACUERDO CORRESPONDIENTE A ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.**

DILIGENCIA:

Para hacer constar que la presente acta ha sido aprobada en la sesión de la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Segura, O.A. celebrada el día 15 de diciembre de 2020.

Información de Firmantes del Documento			
GONZALO	MARTINEZ	MONICA	28/12/2020 10:13(UTC)
URREA	MALLEBRERA	MARIO ANDRES	28/12/2020 10:53(UTC)

